

Antón Costas

Algo habremos aprendido

Desde hace meses, cuando en el crepúsculo del fin de semana me siento a escribir esta columna, lo hago con la intención de abordar alguno de los retos europeos y globales que condicionan nuestro progreso económico y social y a los que no prestamos atención adecuada. Pero ese impulso inicial acaba cediendo a la tentación de hablar de *lo nuestro*. Hoy me ha ocurrido lo mismo.

Desde hace tres años vivimos encerrados con un solo juguete. Si en la novela de Juan Marsé el juguete era el sexo, en la nuestra es el *proceso*. Aunque, bien mirado, también tiene algo que ver con el sexo, pero con el de los ángeles. Porque, como luego diré, nadie sabe a ciencia cierta de qué hablamos cuando hablamos de independencia si, a la vez, queremos seguir perteneciendo a la UE y al euro.

Una forma de escapar a este juego obsesivo y diabólico hubiese sido dejar que los ciudadanos expresaran sus preferencias políticas en unas nuevas elecciones. Pero se ha huido de ellas como gato escaldado. Se ha buscado en la negociación partidista aquello que las urnas no concedieron el 27-S, según frase elocuente del expresidente Artur Mas.

Veremos pronto el efecto de esa huida de las urnas. Pero probablemente hay una cosa que se resentirá de inmediato. Es el buen orden institucional y administrativo. La tormentosa forma en que se ha llegado al pacto de investidura y su propio contenido suscitan dudas razonables que no presagian la estabilidad política necesaria para el buen funcionamiento institucional y el gobierno cotidiano de la cosa pública.

En estas circunstancias políticas nada apacibles, ¿qué enseñanzas se podrían extraer de la convulsa vida política catalana de los últimos tres años que puedan servir de guía para el nuevo Govern de la Generalitat?

Dicho con buena fe, veo cuatro lecciones que pueden ser útiles y ampliamente compartidas:

Primera. No se puede gobernar sólo para una parte de la sociedad. En una sociedad pluralista como la catalana, la inde-

pendencia es un objetivo socialmente divisivo. Todas las elecciones que ha habido hasta ahora, y también todas las encuestas de opinión, muestran que la opción mayoritaria es la aspiración a mejorar el autogobierno, no la ruptura. Sin duda, la independencia es una aspiración política legítima. Pero no puede constituir la prioridad absoluta del nuevo Govern, si no es a riesgo de la fractura social.

La forma en que se ha llegado al pacto de investidura suscita dudas razonables que no presagian estabilidad política

Segunda. Las reglas de funcionamiento democrático se pueden, y se deben, cambiar cuando es necesario; pero no se pueden romper unilateralmente a conveniencia de una parte. Como ha señalado por unanimidad en dos ocasiones recientes el Tribunal Constitucional, no hay nada en la Constitución que impida una consulta en Catalunya. Pero ha de hacerse de acuerdo con las normas democráticas del Estado



MESEGUER

de derecho acordadas en la Constitución. Estas normas no son una cuestión meramente formal que se puede obviar cuando se cree que es por una buena causa. No existe ningún pretendido mandato democrático que esté por encima del Estado de derecho. Este ha sido una conquista fundamental de la democracia frente al arbitrarismo de los estados aristocráticos y autoritarios de los siglos pasados. Además, cuando se rompen esas normas de forma unilateral, se legitima a otros a hacer lo mismo pero en sentido contrario.

Tercera. Las decisiones políticas unilaterales e ilegales, como la resolución del 9-N del Parlament, tienen consecuencias negativas. Como ocurre con los malos hábitos y algunos fármacos, sus consecuencias puede que no sean evidentes de inmediato, pero a medio y largo plazo acostumbra a ser lesivas para la economía y el progreso social. Estamos ante lo que los clásicos llamaban las consecuencias no deseadas de las decisiones propias, que no por no deseadas dejan de ser menos reales.

Cuarta. La independencia absoluta, con lo que significa de creación de un Estado-nación-clásico, no es compatible con la pertenencia al euro, a la Unión Europea y a los organismos internacionales. De hecho, si leemos lo que no dice la declaración del Parlament del 9-N, esta consecuencia está clara también para los que redactaron y votaron esa resolución. Se puede ser como el Estado Libre de Baviera dentro del Estado federal alemán, pero Baviera no puede ser un Estado independiente del Estado alemán y seguir en la UE.

A la espera de que futuras elecciones revelen las preferencias políticas del conjunto de la sociedad catalana, creo que estas cuatro enseñanzas deberían ser tenidas en cuenta por el nuevo Govern de la Generalitat. No se trata de que renuncie a su aspiración política, sino que no la convierta en prioridad absoluta y sepa hacerla compatible con la preferencia mayoritaria de un mejor autogobierno, pero sin llegar a la ruptura. En el debate de investidura el nuevo presidente de la Generalitat se ha comprometido a gobernar para todos. A esa promesa hemos de confiarnos para volver al interés común.●

Pilar Rahola



España, nueva pantalla

La puesta en escena de Mariano Rajoy estaba calculada. Solo, grave, circunspecto, sin permitir preguntas –¡qué sorpresa!–, con aires de salvación nacional y en medio del debate de investidura en el Parlament para marcar paquete estatal ante la perfidia catalana. Como otras tantas veces ante el proceso catalán, el presidente del gobierno esgrimía sus armas: no a todo, aplicación severa de los instrumentos del Estado, ley, bla, bla..., el frontón. Y siempre con la misma dualidad: ni una sola propuesta política y todas las amenazas legales posibles.

El domingo, pues, cuando se presentó Rajoy para volver a recordar que España era una, indiscutible, indisoluble, incolora, inodora e insípida, parecía un día más de los muchos días que hemos acumulado en estos últimos años de rebelión de las sonrisas. El Estado no se movía, Rajoy no se movía, España no se movía y el mundo había dejado de girar.

Sin embargo, todo se había movido, y lo que antes era un presidente de Gobierno inflexible usando la fuerza del Estado para impedir el debate territorial, ahora era un presidente en el abismo, con todos los números de jubilarse

Hasta hoy Catalunya no tenía a nadie al otro lado del teléfono, y hoy se quieren poner unos cuantos

de la Moncloa, con su llamamiento de salvación despreciado por todos menos por Rivera –que nunca pierde la oportunidad de ganar al PP en patriotismo apollado–, y con la certeza expuesta de que usaba Catalunya para intentar salvarse. Pedro Sánchez le ha dicho no, Pablo Iglesias ni lo encuentra cuando lo busca, y después lo envía a hablar con el president Puigdemont, y aunque lo apoyan los ruidos mediáticos, cada día es más un presidente fallido de..., como dijo Gabilondo, “un Estado fallido”.

Nada ha cambiado respecto del conflicto catalán y, sin embargo, mucho ha cambiado. Y no sólo porque Podemos ha puesto la ficha del referéndum sobre el tablero, sino porque el PSOE también quiere distanciarse de la inflexibilidad pepera. Y si el proceso catalán se mantiene fuerte, sólido y sin fisuras, estoy convencida de que se abrirá el debate español. Por supuesto, ni estamos a las puertas de un cambio radical de paradigma español en la cuestión territorial, ni es muy de fiar el PSOE, con sus barones y sus miserias. Pero hasta hoy no teníamos a nadie al otro lado del teléfono, y hoy se quieren poner unos cuantos. Y lo que es aún mejor, los que no quieren ponerse al teléfono catalán quedan como lo que son: inflexibles, coloniales, antiguos.

Por ello mismo, la declaración de Rajoy del domingo, a pesar de la trascendencia sombría que quiso otorgarle, estuvo más cerca de la parodia que de la amenaza. Lo cual no significa que no pueda hacer daño durante su interinidad, pero su tiempo se está acabando tanto como acaba una mirada española carpetovetónica e intolerante. Nuevos jugadores han entrado en la partida, algunos viejos se han movido de posición, y los inamovibles están perdiendo todas las manos. Catalunya avanza. España se mueve.●

Josep Oriol Pujol i Humet

Refugiados y vulnerabilidad social

Nuestro país se prepara para acoger parte de los refugiados que llegan a Europa. Esta solidaridad tiene que ir a cargo del conjunto de la sociedad y no de los más débiles. Estas personas pasarán unos primeros meses en centros y pisos de acogida adaptándose a la realidad del país y acompañados para favorecer un deseable integración.

Pero la verdadera integración se dará en una segunda etapa, cuando los niños pasen a ser uno más del aula, cuando los adultos se ofrezcan para los insuficientes puestos de trabajo que nuestra economía ofrece, cuando vayan al médico de forma ordinaria, etcétera. Es entonces cuando el Estado de bienestar tiene que redimensionarse para los recién

llegados. La integración llegará cuando la atención a estas familias no suponga una sobrecarga más en los servicios sociales que hoy ya no tienen recursos suficientes para atender a los beneficiarios habituales. La integración no puede quedar al azar de unos datos macroeconómicos positivos que puedan absorber nuevas peticiones de empleo. No podemos hacer como si esta crisis no hubiera dejado personas crónicamente fuera del sistema productivo o sin vivienda estable.

Unos mínimos criterios de equidad tienen que contemplar el ineludible redimensionado del sistema de bienestar social. Los costes imprescindibles para atender a los recién llegados no deben asumírselos los beneficiarios actuales o unos trabajadores sociales a los cuales se les pide más de lo que pueden, sino aquella economía financiera que tiene bastantes beneficios y tributa muy poco o nada.

La redistribución de los pequeños beneficios sociales entre los más vulnerables es el germen de la xenofobia, los enfrentamientos violentos, la no integración y el surgimiento de fuerzas radicales. Los que reivindicamos la acogida solidaria de unos refugiados expulsados por la violencia de sus países no podemos dejar de condenar el fraude fiscal, ni la corrupción que impide dotar a la sociedad de unos necesarios recursos para atender a los más débiles. La solidaridad que promueve la acogida de refugiados se tiene que mantener en el tiempo hasta la plena integración. Y para poder hacerlo son necesarios más recursos económicos y humanos que no deberían suponer una sobrecarga a las rentas del trabajo ni al consumo básico. Acoger con dignidad a personas refugiadas exige una mayor tributación de las grandes fortunas, en especial de la especulación financiera.●